

Menos aire para universidades y más presión para estudiantes



Por Joaquín López Barraza

La discusión sobre educación superior ya no pasa solo por cuánto crecen o no las universidades. También pasa por cuánto margen real tienen para sostener calidad, infraestructura y beneficios, y por cuánto peso adicional pueden soportar estudiantes y familias en un escenario más estrecho.

Desde la mirada institucional, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Andrés Bernasconi, advirtió en la Universidad de La Sere-

na que hoy las casas de estudio enfrentan mayores exigencias, pero sin recursos que crezcan al mismo ritmo.

En su exposición sostuvo que las propias expectativas internas, junto con las presiones del regulador, empujan a las instituciones a querer más laboratorios, más becas, más infraestructura y más desarrollo académico, aunque «ese dinero no está disponible».

Por eso, insistió en que la gestión universitaria dejó de ser un asunto secundario. «Sin lo que está de-

trás de la bambalina, sin la sala de máquina, la institución no camina», señaló, aludiendo a la presión que hoy recae sobre el gobierno universitario en un sistema donde —según dijo— administrar bien se ha vuelto tan importante como enseñar o investigar.

Desde el otro lado del problema, el economista Jonathan Hermosilla, vicedecano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central Región de Coquimbo, advirtió que cualquier endeudamiento en gratuidad o en los me-

canismos de cobro del CAE puede recaer con más fuerza sobre estudiantes que accedieron a la educación superior precisamente gracias a esos apoyos.

■ En entrevista con Diario La Región planteó que limitar esos beneficios «va a tener un impacto negativo en la movilidad social», especialmente en personas trabajadoras, jefas de hogar y estudiantes que ingresaron más tarde a la universidad.

Hermosilla agregó que el efecto no sería solo individual. A su juicio, un retroceso en gratuidad también puede golpear a universidades adscritas, justamente porque ese beneficio ha sido una vía de acceso para grupos que antes quedaban fuera del sistema. «Va a tener un impacto también en las instituciones de educación superior», sostuvo.

Ese debate ya tiene una expresión concreta en la agenda nacional. El gobierno de José Antonio Kast propuso restringir la gratuidad universitaria para futuros postulantes mayores de 30 años, aunque sin afectar a quienes ya estudian con ese beneficio.